

tanse las copias de este fallo y alegatos, al redactor del *Semanario Judicial*, y elévese este juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision.

Así definitivamente juzgando lo pronunció y firmó el C. Juez de Distrito, primer suplente en ejercicio, Mariano Pimentel.

Doy fé.—*Mariano Pimentel*.—*Francisco Ruiz*,—secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 7 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Radislao Vega en representación de D. José M^a Flores, contra los procedimientos del Lic. Ignacio Trejo, que con el caracter de Magistrado del Tribunal Superior del Estado, conoció del incidente de recusacion en los juicios que seguia D. José M^a Flores contra Feliciano Camacho, Manuel Nieto y José M^a Villaseñor, imponiendo á su poderdante una multa de cincuenta pesos por cada una de las recusaciones; con cuyos procedimientos se han violado en concepto del quejoso, las garantías que otorgan los artículos 16 y 22 de la Constitucion federal, por no haber sido elegido popularmente el Lic. Trejo para la Magistratura que desempeña, como lo exige la Constitucion particular del Estado, y por excesivas las multas que impuso al recusante.

Considerando: que por constancias oficiales que obran en los autos, aparece: que efectivamente el Lic. Ignacio Trejo cuando conoció del incidente de recusacion, ejercía las funciones de Magistrado por decreto de la Legislatura y no por eleccion popular como lo dispone el artículo 96 de la Constitucion particular del Estado; por cuyo motivo, con los actos que han motivado este recurso, ha violado el artículo 16 de la Constitucion Federal; con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta: que es

de confirmase y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 5 de Diciembre del año pasado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. José M^a Flores, contra los actos y providencias dictadas por el C. Lic. Ignacio Trejo, con relacion á los juicios que le promovieron Camacho, Nieto y Villaseñor y contra la multa que impuso al referido Flores.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*P. Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*Pedro Ordaz*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*M. Arza*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*Lic. Enrique Landá*, secretario.

Es copia que certifico. México, 14 de Abril de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Lic. Luis G. Zacarías y demas interesados en la posesion del templo de los Remedios en Cholula, contra los procedimientos del C. Gefe político del mismo Distrito, que mandó despojar á los referidos, de dicho templo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Luis G. Zacarías, presidente de la junta edificadora del templo de los Remedios, contra el C. Gefe

político de Cholula, por haberlo despojado del referido templo, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dice: que el hecho que ha servido de fundamento á la queja de la junta edificadora para haber interpuesto el recurso de amparo, no está probado con arreglo á la ley, en virtud de que la información que se le recibió, en la que declaran 20 testigos sobre ese hecho, no merece fé por estar desvirtuada con la otra información que rindió la Gefatura política, ó sea la autoridad responsable, ante el Tribunal de 1ª instancia de aquel Distrito, para justificar los asertos de su informe, que corre agregado á fojas 8 y 9 del expediente.

Es verdad que esos 20 testigos que declaran á su favor, manifiestan en sus respectivas declaraciones, contestando á la 1ª pregunta del interrogatorio que exhibió al efecto, que la repetida junta fué despojada de la Iglesia de los Remedios de órden de la Gefatura política de Cholula; mas ninguno de los testigos explica satisfactoriamente la razón de sus dichos, por referirse todos á haber presenciado los hechos, es decir, haber estado en el lugar, á la hora que se consumaron; pero ninguno se atreve á decir que hubiera visto la órden dada por la autoridad contra quien se ha dirigido la queja, para que se llevara á cabo el despojo, ni oyó que tal órden se hubiera dado de palabra ó por escrito.

Así es que la falta de esta circunstancia esencialísima, demuestra que el acto que se atribuye al C. Gefe político, no es exacto; y que cuanto se ha dicho en su contra por la junta, no es más que con el fin de volver á la posesión del templo, por medio de la autoridad que V. C. Juez, dignamente representa.

No puede dudarse que ese es el fin que se ha propuesto la junta, si se atiende á las concluyentes pruebas que ha rendido la Gefatura política, para libertarse del cargo que por ella se le hace. Estas pruebas consisten en primer lugar, en el certificado del

Escribano C. José María Torres, de fojas 7, en que se hace constar que la autoridad de Cholula, no tomó participio alguno en el acto de la entrega del templo al Capellán D. Vicente Pérez; en segundo lugar, en la declaración del cura, vicario foráneo de San Pedro Cholula, que se registra á fojas 31 y vuelto, en la que dice lo mismo que el Escribano que signó y firmó el certificado, agregando, que cuando se hizo con respecto al hecho denunciado fué obra suya exclusivamente, para cumplimentar, cual le correspondía, el decreto del Sr. Obispo, en que previno: que el templo no estuviera á disposición de la junta que se titula edificadora, sino del Capellán mencionado; en tercer lugar, en el dicho de 32 testigos mayores de toda excepción, que son las personas de mas representación y mas acomodadas de Cholula, que presenciaron lo cierto del acto reclamado, y que aseguran que el C. Gefe político no es responsable de ese acto.

En vista pues, de semejantes constancias, se deduce con toda evidencia, que la Gefatura política no es la que dispuso el hecho de que se ha quejado la junta edificadora, representada por el C. Lac. Zacarías; y que por lo mismo no procede el amparo que ha interpuesto, por no haber acto que viole las garantías que otorga la Constitución general.

Sírvase V. C. Juez así determinarlo, con fundamento del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, imponiéndole al C. Zacarías, una multa de \$300 con arreglo al artículo 16 de la propia ley, y dejando á salvo los derechos de la Gefatura política contra el promovente, por las falsedades de su escrito de queja.

Zaragoza, Diciembre 30 de 1873.—*E. Sanchez.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Puebla, Enero 24 de 1874.—Visto el recurso de amparo que con fecha 2 de Diciembre de 1873, promovió el C. Lic. Luis G. Zacarias, como presidente de la Junta edificadora del Templo de la Virgen de los Remedios en Cholula, contra la orden que según el mismo asegura, expidió el C. Gefe político del Distrito, para que la referida Junta fuese despojada del Templo; violando con esto la garantía del artículo 16 de la Constitución federal de la República; visto el informe de la autoridad, que niega haber tomado parte en aquellos hechos; las pruebas rendidas por el promoviente, así como la información de testigos que á solicitud del Gefe político, recibió el Juez de 1ª instancia del mismo Distrito, con todas las demás constancias de autos que se debió ver y tener presentes, y considerando:

1º Que en virtud de haber negado el Gefe político de Cholula que por su orden hubieran tenido lugar los hechos de que se queja el C. Lic. Zacarias, los esfuerzos de este se han reducido principalmente á destruir esa negativa, y los de la autoridad á acreditar que ninguna parte tomó en ellos; por cuya razón, de preferencia deben examinarse las pruebas rendidas á este objeto, y consisten de parte del quejoso, en el informe que los testigos dieron y constan á fojas desde la 2 á la 7 de su cuaderno.

2º Que si bien es cierto que con arreglo al artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, la autoridad contra cuyos actos se promueve el amparo no es parte en estos recursos, también lo es que según el mismo artículo, tiene derecho de informar con justificación sobre los hechos que se versan, y en el caso presente no podía justificar lo que había acaecido, sino por medio de un informe testimonial, como el recibido por el C. Juez de 1ª instancia á solicitud del Gefe político de Cholula, razón por la cual debe también tenerse en consideración esa prueba. Pero que aun cuando así no fuera, el hecho

es que la información se rindió, y que por auto de 22 de Diciembre último se mandó agregar como justificante del informe, indudablemente para que surtiera sus efectos.

Que siendo el contenido de esta prueba diametralmente opuesto al de la rendida por el C. Lic. Zacarias, con arreglo á las prescripciones de la ley 10. título 16, partida 3ª, al Juzgado corresponde calificar ambas, para decidir por que parte se probó mejor y bajo este concepto pronunciar la sentencia que corresponda.

3º Que supuesto que el C. Lic. Zacarias no se queja de que la Junta que representa haya sido despojada del Templo por el C. Gefe político ó sus agentes, sino de que el despojo se verificó de orden de la Gafatura su prueba debió consistir, no en que el Cura y Capellán se apoderaron de dicho Templo, sino haber presentado la orden por que esto se hizo, si fué dada por escrito, ó declarar sus testigos que la habían visto escrita, si así se dió, ó oír darla de palabra, en razón de que los dos únicos medios de dar una orden es comunicarla verbalmente ó por escrito á la persona que deba cumplirla.

4º Que aunque los testigos del C. Zacarias afirman que de orden de la Gafatura política se verificaron los hechos de que este se queja, no satisface la razón de su dicho por que no aseguran que vieron escrita ó oyeron dictar de palabra la orden como debió probarse, según se dijo en el considerando anterior, sino que solo que tal orden se dió por haber presenciado el acto de la posesión, es decir, que les consta de ciencia cierta los efectos de la orden que suponen fué expedida por el Gefe político, pero no la misma orden; en cuyo caso estas declaraciones no corresponden al objeto que debiera probar y por lo tanto, es evidente que el C. Lic. Luis G. Zacarias no ha probado su queja.

5º Que la prisión del sacristán tampoco prueba que la autoridad hubiese dado orden para despojar á la Junta, por aparecer justificado en la declaración del Cura Don Vi-

cente Campos, que se dió aviso á la Gefatura, de que por causa del referido sacristan podía alterarse la tranquilidad pública; y deber es de las autoridades conservar á todo trance el orden público, sin que para ello sea obstáculo la independencia entre la Iglesia y el Estado, cuando el desorden tenga por causa una cuestion religiosa.

6º Que ademas de ser ineficaz la prueba rendida por el promovente segun se acabó de ver, aparece suficientemente justificado que la autoridad no tomó parte en el acto de la posesion: primero, por el certificado del Escribano C. José M. Torres que consta á fojas 7 de este cuaderno, en cuyo documento ademas de asegurarse que todos los hechos de que se queja el C. Lic. Zacarias fueron ejecutados por el Cura y Capellán ó de su orden, clara y terminantemente se ve que la Gefatura política no tomó parte alguna en la posesion: segundo, por la carta del mismo Lic. Zacarias inserta en el certificado del Escribano C. Torres pues si se hubiesen hallado presentes el Gefe político ó otro de los empleados, á ellos y no al Escribano se habría dirigido la comunicacion con la protesta; y tercero, por la informacion de testigos que obran á fojas desde la 19 á la 36 de estos autos, y en la que 21 testigos unánimemente aseguran que ningun funcionario ni empleado de la Gefatura tomó parte en la prision del sacristan, con la circunstancia de que unos testigos como el Cura D. Vicente Campos y Capellán D. Vicente Perez, afirman ser ellos los autores de los hechos de que se queja el C. Lic. Zacarias, y otros como los CC. Ignacio Martinez y José M. Bueno aseguran haber quitado las cerraduras de las puertas; cuya circunstancia hace que se dé mas crédito á estos testigos que á los presentados por el Presidente de la Junta, pues mientras los unos afirman ser los responsables de los hechos que motivaron la queja, los otros declaran que esos hechos se efectuaron de orden de la autoridad, pero sin asegurar que hayan visto escrita ó oído dar esa orden como se ha dicho.

7º Que por mas que se quiera, no es posible pasar desapercibida una prueba tan completa, ya que como se dijo en el segundo considerando, puede sostenerse que la autoridad contra quien se entable un amparo está en su derecho para rendir informacion que justifique su informe, y ya tambien por ser obligacion de los jueces buscar la verdad por cuantos medios estuvieren á su alcance, sin encerrarse en el estrecho círculo de las ritualidades y formas de los juicios.

8º Por último, que una vez demostrado no ser cierto que el Gefe político de Cholula hubiese dado orden para que la Junta reedificadora del templo de la Virgen de los Remedios fuese despojada, aparece que dicha Junta procedió con temeridad, queriendo aprovecharse para conseguir sus fines, de un recurso que la Constitucion ha concedido para asegurar las garantías de los individuos, y nunca para que sirvan de instrumento para otros actos, que aunque fueran legales, no son aquellas para que el legislador concedió el recurso. Por tales consideraciones y con fundamento de las leyes citadas, así como la de 20 de Enero de 1869 y artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara.

Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Junta reedificadora del templo de la Virgen de los Remedios de Cholula, en su queja contra el C. Gefe político del mismo Distrito, por cuyo orden se asegura fué despojada dicha Junta.

Segundo: que la misma Junta pague cien pesos de multa, conforme al artículo 16 de la citada ley de 20 de Enero de 1869.

Hágase saber y sáquense de esta sentencia las copias correspondientes para los periódicos oficiales del Gobierno Supremo y del Estado; y con atento oficio, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la ley. Lo mandó y firmó el C. Juez 1º suplente de Distrito, ante mí.

Doy fé.—*Vicente Espinosa y Bandini.*
Ante mí.—*Francisco Olavarrieta.*

I en cumplimiento de lo mandado, pongo el presente para su publicacion en el periódico oficial del Gobierno Supremo.

Puebla de Zaragoza, Enero 26 de 1874.
—Francisco Olavarrieta.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 9 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Lic. Luis G. Zacarías y demas interesados en la posesion del Templo de los Remedios en Cholula, contra los procedimientos del C. Gefe Político del mismo Distrito, que mandó despojar á la referida Junta de la posesion del Templo, con cuyo acto considera el quejoso que se ha violado el artículo 16 de la Constitucion. Visto el informe de la autoridad responsable, en que niega haber tenido participio en ese despojo; las pruebas rendidas tanto por esa autoridad, como por el promovente; lo pedido por el C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior que negó el amparo y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que la escepcion que opone y pretendió probar la Gofatura Política, consiste en que no dió ninguna orden ni por escrito ni verbal para que se efectuase el acto de que se queja el C. Lic. Luis Zacarías, ni tuvo ninguna intervencion en él; y de autos aparece probado, que intevino fuerza armada sujeta á las órdenes inmediatas del Gefe Político, impidiendo que alguno de los individuos de la Junta entrasen al Templo ó usasen de sus derechos á él, cuyo acto manifiesta de una manera clara la intervencion de la autoridad, con lo cual se infringió el artículo 16 constitucional que alega el quejoso; con fundamento de este artículo y de los 101 y 102 de la misma Constitucion, así como de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior,

que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Junta edificadora del Templo de los Remedios de Cholula, en su queja contra el C. Gefe Político del mismo Distrito, por cuya orden se asegura fué despojada la Junta, y se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Luis G. Zacarías y demas interesados en la posesion del Templo de los Remedios, contra el acto de que se quejan.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José M. Iglesias.—P. Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—M. Auza.—Simon Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—J. G. Ramirez.—I. Altamirano.—Enrique Landa, secretario.

Es copia. México, Febrero de 1874.—
Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon por D. Teodoro Roel, contra la orden dictada por el Juez 3º de letras de Monterrey, que lo mandó reducir á prision.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal sustituto, dice: que el dia 14 del corriente á las nueve de la noche, vino ante V. el C. Teodoro Roel por medio de atento ocurso, solicitando amparo y pidiendo en otrosí del mismo ocurso, se suspendiera una orden de aprehension que contra él habia dictado el C. Juez 3º de le-